

da para la liquidacion respectiva, y fecha clévese testimonio en forma al Ministerio de Fomento, por conducto del Gobierno del Estado, para lo que haya lugar, reponiéndose por la parte interesada el papel sellado que ha dejado de usarse.

El ciudadano Licenciado Juan José Ramírez, Juez de Distrito propietario, lo decretó y firmó por ante mí el infrascrito secretario.—Doy fé.—*Lic. Juan J. Ramírez. J. Crisóstomo Lara.*

Es copia fielmente sacada de su original. Chiapas, Febrero ocho de mil ochocientos setenta y uno.—*Crisóstomo Lara.*

AMPARO.

Juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de México por Pascual Valdés y Valentín Piña, contra el Gefe Político de la ciudad de Toluca, ciudadano Nolasco Cruz, que los sentenció á la pena de muerte, sin ser el juez competente que debe juzgarlos.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez 1º suplente:

El Promotor fiscal dice: Que el ciudadano Gefe Político del Distrito de esta ciudad, en 25 de Diciembre del año próximo pasado, sentenció á la pena de muerte á los reos Pascual Valdés y Valentín Piña, por el delito de plagio, verificado en 23 de Abril de 1868, en la persona del ciudadano Sebastian Silva, vecino de la hacienda de Nijini, en jurisdiccion de Ixtlahuaca, habiendo fundado el procedimiento en la ley de 9 de Abril último, é imponiendo la pena que señala el artículo 3º de la propia ley.

El que lleva la voz, ya manifestó en la respuesta del día 19 de Enero, que la queja de los expresados reos era arrojada á la ley orgánica, y que procedió el recurso de amparo.

En efecto, consta en autos que fueron juzgados y sentenciados Pascual Valdés y Valentín Piña por el plagio del ciudadano Silva, apareciendo probado que aquel delito se perpetró el 23 de Abril de 1868, y constando por otra parte en los mismos autos, que en aquella fecha aun no se había publicado en el Distrito de Ixtlahuaca el decreto del Estado de 21 de Abril del propio año. Tampoco en Abril de 68 se había expedido la ley general de 9 del mismo mes, conforme á la cual se los juzgó.

Los hechos que se indican, se registran en las justificaciones que remitió á este Juzgado el ciudadano Gefe Político y comunicacion recibida del Supremo Gobierno del Estado.

El mismo ciudadano Gefe, en su informe de 13 de Enero, hace la observacion de que la autoridad tuvo jurisdiccion para juzgar á los referidos reos, deduciendo, que con su procedimiento no habia violado las garantías constitucionales que invocaban los quejosos: que no procedia el amparo que pretendian, porque el caso se hallaba comprendido en el artículo 8º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Sostiene tambien, que la pena de muerte á que fueron sentenciados, estaba bien aplicada, porque el decreto del Estado que la establece fué publicado en esta ciudad el día 21, antes que cometieran el delito: asercion que despues modifica en su oficio del día 24, pues en él manifiesta que la publicacion del referido decreto se hizo en esta capital el día 23 del referido mes y año.

El que habla cree que la cuestion que entraña el presente juicio es clara, porque se trata de la aplicacion de la ley á los hechos que aparecen justificados en los autos. Queda solo por contestar la observacion que hizo en su informe el ciudadano Gefe Político, de que el presente caso se halla comprendido en el artículo 8º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Las autoridades á quienes la ley general de 9 de Abril del año próximo pasado les cometió la facultad de juzgar y conocer en

los delitos de plagio, no pueden considerarse judiciales en el sentido del artículo 8º de la citada ley de 20 de Enero, porque en él se dice que "no es admisible el recurso de amparo en los negocios judiciales."

Los negocios judiciales, civiles y criminales en la sustanciación que tienen, se observa cierta ritualidad que da la garantía en el procedimiento, la que se extraña en el orden gubernativo. Y mas que todo, reconocer las tres instancias, especialmente cuando se trata de la aplicación de la pena de muerte.

No siendo lo mismo en el procedimiento que establece la ley de 9 de Abril, pues con solo la opinion que forma la autoridad política despues de unas diligencias imperfectas, manda privar á un hombre de la existencia. Lo cual no se puede imaginar que sea conforme con los principios conquistados en el Código fundamental de la República.

En buena hora que la ley haya dicho, que en los negocios judiciales no es admisible el recurso de amparo; pero que no se diga que las determinaciones de las autoridades políticas no se hallan comprendidas en el artículo 101 de la Constitución. Porque si así fuera, serian tan pocos los casos en que procediese el recurso de amparo, que vendrian á quedar ilusorias las mas preciosas garantías del hombre.

Esta verdad se palpa en el caso que me ocupa, pues no es mas que ver las diligencias que remitió la Gefatura política, para convencerse de la ligereza con que se los condenó á muerte á Valdés y á Piña. Pues en rigor de derecho no aparece justificado, que los expresados reos hayan verificado el plagio del ciudadano Silva. Y es bien claro, por otra parte, que se les juzgó y sentenciado por una ley expedida con posterioridad al hecho criminoso.

Resulta de lo expuesto: que la autoridad política del Distrito de esta ciudad, con el procedimiento que practicó en contra de los reos Pascual Valdés y Valentin Piña, al juzgarlos y sentenciarlos á la pena de muer-

te, por el plagio del ciudadano Sebastian Silva, fundando su procedimiento en el artículo 3º de la ley de 9 de Abril del año próximo pasado, cuando el delito se supone que lo perpetraron en Abril de 1868, ha violado las garantías individuales que otorga el artículo 11 de la Constitución federal.

En esta circuncia el que suscribe, y fundado en las constancias que obran en estos autos, y de conformidad con el artículo 2º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, pide al Juzgado declare: Que la Justicia de la Union ampara y protege á Pascual Valdés y Valentin Piña, para que no se efectúe la sentencia que el ciudadano Gefe Político del Distrito de esta ciudad, pronunció en contra de ellos el 25 de Diciembre del año próximo pasado, por el plagio del ciudadano Sebastian Silva, condenándolos á la pena del último suplicio.

Toluca, Febrero seis de mil ochocientos setenta y uno.—(Firmado.)—Ceballos.

Alegato de los quejosos Pascual Valdés y Valentin Piña.

Es un principio general que las leyes no tienen efecto retroactivo; principio que hemos proclamado á ejemplo de todas nuestras Asambleas Nacionales.

Hay verdades útiles que no basta publicirlas una vez, sino que es necesario publicirlas siempre, y que deben heír sin intermision el oído del Magistrado, del Juez, del Legislador, porque constantemente deben presentarse á su mente.

Mr. Portalis citado por Mr. Dupin, en sus lecciones sobre la justicia.

Ciudadano Juez de Distrito:

El consejo que inculcan los sabios que acabamos de citar, se ha adoptado constantemente por nuestros legisladores, y el axioma que la sirve de objeto se repite hasta la saciedad en las aulas de jurisprudencia.

Desde en tiempo de los romanos se consigna ese dogma jurídico, de que las leyes

no tienen efecto retroactivo. Así es de verse en la ley 7 del Código de Legibus. No se olvidó en las decretales, siendo muy expresos los capítulos 29 y 13 de Constitutionibus; se repitió en la ley 200 del Estilo; se infiere de la ley 12, tit. 59, lib. 49 del Fuero Real, de la 15 tit. 14, partida 32, y de la 13 título 17, libro 10 de la Novísima Recopilación.

En todas nuestras Constituciones se ha venido consignando, como si temieran nuestros legisladores que se olvidase alguna vez. Por esto se escribió de una manera categórica en el artículo 148 de la Carta de 24; en el 45 parte 42, de la 32 ley constitucional de 1836; en el 67 parte 22 de las Bases Orgánicas de 43; y en el Estatuto Orgánico de 56, artículo 58.

No era posible que se escapase á la ilustración de los legisladores de 1857; y lejos de esto, no se conformaron con colocar en la acta de los derechos del hombre el principio, "de que no se podrá expedir ninguna ley retroactiva," sino que para mayor claridad y mejor garantía, añadieron:

"Que nadie puede ser juzgado ni sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas á él, por el Tribunal que previamente haya establecido la ley."

Esta es la preciosa garantía que consigna el artículo 14 de la Constitución de 57, como un derecho del hombre que pretendieron reivindicar nuestros legisladores, poniéndolo á cubierto de todo ataque arbitrario.

Ahora bien; nosotros nos hemos quejado de que en el proceso que se nos formó y sentencia de muerte que pronunció en nuestra contra el ciudadano Gefe Político Nolasco Cruz, se violó la garantía del artículo 14 antes citado, y para probarlo, no necesitamos mas que de una argumentación estrictamente lógica y que es tan clara como la luz del medio día.

Es la siguiente que no tenemos recomendar al criterio de V.

Dice el artículo 14: "que nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes

dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas á él, por el tribunal que previamente haya establecido la ley." Es así, que á nosotros se nos ha juzgado y sentenciado por la ley de 9 de Abril de 1870, muy posterior al plágio de Silva, por un Tribunal especial establecido también posteriormente y que no ha aplicado exactamente la ley; luego se ha infringido en nuestra contra el artículo 14 de la Constitución federal en todas sus partes.

Probaremos la menor en cuanto á la primera parte.

El plágio del ciudadano Sebastian Silva se verificó entre tres y cuatro de la tarde del día 23 de Abril de 1868. Esto consta bien probado con el informe del Gefe Político (fojas 12;) con la declaración de Arredondo extractada á fojas 33 vuelta, con la de Jesus Orozco fojas 37 y vuelta, y con la de Vicente Avila fojas 39 y vuelta.

Esto tambien se halla justificado con las declaraciones de Silva y de su señora que se registran en el proceso de Arredondo á las fojas 30 y 223, y de las cuales hizo mérito en su alegato nuestro patrono, como es de verse en la página 29 del cuaderno impreso que corre en autos.

Ahora bien: verificado el plagio entre tres y cuatro de la tarde del día 23 de Abril de 1868, no cabe duda, que la ley de 9 de Abril de 1870, es dada casi á los dos años despues de cometido el plagio. Es así que se nos ha juzgado y sentenciado con arreglo á esta ley, como se ve en la sentencia, fojas 17, luego se nos ha juzgado y sentenciado por una ley dada con posterioridad al hecho.

La segunda parte de la menor de nuestro silogismo es tambien muy clara.

Los gefes políticos en el Estado de México no son Jueces ni tienen facultad alguna judicial.

Vd., ciudadano Juez, que es abogado postulante en el foro del Estado, conoce bien el decreto número 26 de 21 de Abril de 1868, que es la ley orgánica que reglamenta las atribuciones de los Gefes Políti-

cos; y sabe perfectamente que en el art. 12 de ese decreto, se establece: "Que las atribuciones de estos funcionarios, *son puramente gubernativas y municipales*; que en la fracción 3ª del art. 23 se les prohíbe usurpar, reformar ó modificar las atribuciones del poder judicial; y por último, que en el artículo 21 del mismo decreto, se prescribe, que los Jefes Políticos no tienen mas facultades que las que expresamente les concede ese repetido decreto, sin que se entiendan concedidas otras por falta de expresa restricción.

Esto último es un precepto constitucional en el Estado, como es de verse en el artículo 197 de la Constitución de 12 de Octubre de 1861, y en el 122 de la reformada de 14 de Octubre de 1870.

Segun esto, no es el Gefe Político de Toluca un *juez ó tribunal ordinario* para conocer y fallar en los delitos de plagio; ya porque no tiene facultad alguna judicial, segun la ley orgánica de Jefes Políticos del Estado, y ya porque la Constitución federal de 1857 previene, que la aplicación de las penas propiamente tales sea exclusiva de la autoridad judicial.

Se ha necesitado para que el Gefe Político de Toluca, y con él los otros del Estado de México, conozcan de los procesos de plagio, que la ley de 9 de Abril de 1870 suspenda la garantía de la primera parte del artículo 13, y la del artículo 21 de la Constitución federal, para que en calidad de *Tribunales especiales*, y no obstante ser *autoridades puramente gubernativas y municipales*, juzguen y sentencien á los acusados de plagio.

Luego el Gefe Político de Toluca es para conocer y fallar en los delitos de plagio, un juez ó tribunal *especial* criado por una ley federal de suspensión de garantías, y nunca un Juez ó Tribunal ordinario criado por la ley orgánica de Tribunales en el Estado de México, que es libre y soberano para todo lo relativo á su régimen interior.

Pues bien: la ley de 9 de Abril de 1870, no ha suspendido la garantía del artículo

14 de la Constitución federal que prohíbe el efecto retroactivo de las leyes; luego no puede tenerlo esa misma ley de 9 de Abril.

Ella suspendió las garantías de los artículos 13 y 21 de la Constitución, para los casos futuros, para los que acaeciesen á partir del día de su publicación, hasta el día 10 de Abril de 1871 en que dejara de estar vigente. De otra manera, si esa suspensión de las garantías de los artículos 13 y 21, se refiriera á hechos pasados, á casos anteriores á la ley, tendria efecto retroactivo, suspendiéndose de hecho y por un ataque arbitrario, la garantía del artículo 14, que no han pensado suspender los Legisladores en la ley de 9 de Abril.

Es claro entonces, que para juzgar y sentenciar á los acusados de plagios verificados antes de la ley de 9 de Abril de 1870, no están suspensas las garantías de los artículos 13 y 21 de la Constitución federal; luego no se pueden juzgar y sentenciar los acusados de los plagios verificados antes de la ley de 9 de Abril por las autoridades administrativas y políticas, á quienes esa ley erige en tribunales especiales, para conocer y fallar únicamente sobre los delitos de plagio, verificados con anterioridad á la ley.

He aquí entonces bien probada nuestra proposición menor en su segunda parte, en la que hemos dicho, que se nos ha juzgado y sentenciado por un *juez ó tribunal especial* establecido con posterioridad al hecho que se nos imputa, porque podemos formar este nuevo silogismo.

El Gefe Político de Toluca, forma un Tribunal especial para conocer y fallar en los delitos de plagio verificados despues de publicada la ley de 9 de Abril de 1870; es así que el Gefe Político de Toluca nos ha juzgado y sentenciado por un plagio que malamente se nos imputa, y que se verificó el 23 de Abril de 1868 luego se nos ha juzgado y sentenciado por un Juez ó Tribunal especial, establecido con posterioridad al hecho que se nos imputa.

La tercera parte de la proposición de nuestro primer silogismo consiste en afirmar,

que ese Juez especial no ha aplicado, siquiera con exactitud al hecho, la ley de 9 de Abril de 1870; y esta es una verdad notoria que demostraremos someramente.

Esa ley exige para que se imponga la pena de muerte á los acusados de plagio, que el delito esté probado.

No pueden ser mas expresas estas palabras del artículo 3º de la ley: "Dentro de dicho término, se pronunciará sentencia de muerte *si fuere probado el delito.*"

Y á nosotros no se nos ha probado el plagio de Silva. Solo se aducen en nuestra contra los dichos de los que figuran como cómplices, que lo son Cenobio Arredondo, Jesus Orozco y Vicente Avila, por el adminículo que se dice prestan á esas declaraciones los dichos de Antonio Pliego y de Sebastian Silva, y por la prueba de fama pública que se apoya en el dicho de cinco testigos en contra del primero de nosotros que lo es Pascual Valdés, y en el de siete en contra del segundo que lo es Valentin Piña; y es claro que todo esto no forma una prueba legal en nuestra contra.

Son principios bien sabidos en la jurisprudencia, que el dicho de los cómplices, nunca tiene valor alguno, y que los acusados y confesos de crimen atroz no pueden ser testigos.

Estos axiomas se hallan expresos en las leyes 10 y 21, tit. 16, partida 3ª, en las leyes 3ª, párrafo 5º del Digesto de Testibus, (lib. 22, tit. 5º) y 17 del Código de Accusationibus et Inscriptionibus (lib. 9, tit. 2.)

Son tambien dogmas jurídicos enseñados por los sabios, como el Gregorio López en las Glosas 3ª de la ley 10 y 3ª de la ley 21; el Vilanova en su obra titulada "Materia Criminal Forense," tomo 2º obs. 10, cap. 4º, núm. 132, pág. 326; el Gutierrez en su "Práctica Criminal" tomo 1º cap. 8º pág. 248, edicion de 1826, núm. 17, y el clásico y moderno criminalista Mittermaier, en su tratado "de la prueba en materia criminal" parte 5ª pág. 331.

Luego nada valen los dichos de los acusados y sentenciados por plagio, y que apa-

recen como cómplices, que lo son Cenobio Arredondo, Jesus Orozco y Vicente Avila.

De mas á mas, el segundo que ha sido fusilado, no ha podido ratificar su declaración ó identificar nuestras personas; y Arredondo y Avila, han retractado ó negado sus declaraciones.

La ratificacion del testigo es necesaria por el artículo 20, fraccion 3ª de la Constitucion federal, que exige la presencia y careo con el testigo; por el artículo 12 del Decreto del Estado, número 203, de 16 de Octubre de 1830, y por el artículo 55, fraccion 8ª de la ley general de 5 de Enero de 1857, vigente en el Estado por el decreto número 137 de 4 de Octubre de 1869, que dispone lo mismo.

Cuando menos, habria sido necesario *abonar* al testigo muerto Jesus Orozco, segun el artículo 15 del decreto de 16 de Octubre antes citado, y ni se hizo, ni era posible que algunas personas abonasen á Orozco, que fué fusilado por plagario.

Y no se estrañe que citeamos en nuestras argumentaciones las leyes del Estado; porque declarando el artículo 6º de la ley de 9 de Abril de 1870, que no se reputan federales las autoridades de los Estados que juzgan á los acusados de plagio, es claro que estas tienen que sujetarse á las leyes de Procedimientos de los Estados, para *dar por probado el delito* ó imponer la pena de muerte.

Respecto de la retractacion ó contradiccion de los reos Arredondo y Avila, es clarísima la ley 14, tit. 16, partida 3ª al fin, segun la que el testigo que se contradice á sí mismo, no merece fé en juicio.

Los adminículos de las declaraciones de Silva y Pliego tampoco tienen valor legal.

El primero solo dice, que hasta despues ha sabido que los que lo plagiaron, se llaman Pascual Valdés, etc., y no menciona á Valentin Piña. Luego respecto del primero es solo testigo de oídas, y esta clase de testigos no hace fé, segun la ley 28, tit. 16, partida 3ª.

El dicho de Antonio Pliego solo es refe-

rente á las señas de las personas por quienes le preguntaba el Juez, ó lo que es lo mismo, dió las señas ó filiacion de Pascual Valdés, por las que se le interrogó; pero ni dijo ni ha dicho jamás que Valdés sea plagiarlo. Fué un testigo para identificar la filiacion de un acusado, que pudiera servir para la averiguacion, pero nunca un testigo de culpabilidad. Y es claro, que de que Antonio Pliego, que está libre y declarado inocente por los Tribunales en el plagio de Silva, conozca á Valdés, no se infiere que éste sea cómplice en el plagio del mismo Silva.

La prueba de fama pública es una barbaridad; permítasenos la frase.

La ley de 9 de Abril de 1870 no admite esa prueba del delito de plagio. El celo indiscreto, (hablamos en rigurosa defensa,) del ciudadano Jose Político Nolasco Cruz, ha confundido quizá esta ley con la ley de 12 de Abril de 1869, que declarando vigente la Circular de 12 de Marzo de 1861, admitia la simple prueba de que dos testigos idoneos y de conocida probidad, asegurasen que un hombre pertenecía á una banda de plagiarios; pero esta ley dejó de estar vigente, por disponerlo ella misma en su artículo 5º desde el día 10 de Abril de 1870; y la ley de 9 de Abril, se cuidó ya de poner en vigor aquella tremenda circular, que tanto se presta á la calumnia, y se contentó con exigir, *que el delito*, esto es, un caso especial, estuviera legalmente probado.

Y á nosotros ni se nos ha dejado tiempo para justificar nuestras defensas y confundir á los testigos, incluso los de fama pública, de los que á su vez tendremos que encargarnos, para demostrales que no son idoneos.

Hasta aquí, sin perder un palmo de terreno, hemos probado que el C. Gefe Político Nolasco Cruz, violó en contra nuestra todas las garantías del artículo 14, porque dando efecto retroactivo á la ley de 9 de Abril de 1870, nos ha juzgado y sentenciado por un hecho verificado el 23 de Abril de 1868, siendo el mismo funcionario un juez ó Tribunal especial establecido con pos-

terioridad al hecho, y persona que no ha aplicado exactamente la ley al hecho mismo.

Veamos ahora el mérito forense que tengan los argumentos del C. Gefe Político Agustín Gonzalez, que pretende sostener los procedimientos y sentencia de su anterior.

El dice en sustancia, á la foja 13, que las leyes que alteran la organizacion de los Tribunales, no se considera que tengan efecto retroactivo; porque de lo contrario, seria imposible todo cambio en esa organizacion; y nos cita como ejemplo, el de la ley de 19 de Enero de 1869, que quitando los Consejos de Guerra, estableció los jurados para los delitos militares, sin que á nadie se le haya ocurrido decir, que esa ley orgánica de Tribunales sea contraria al artículo 14 de la Constitucion federal invocado por nosotros.

Todo eso es una verdad de á folio; pero ni viene al caso, ni puede menos que contener un sofisma en la argumentacion, lo cual asiento y demostraré, guardando el debido respeto al C. Gefe Político.

Es una verdad innegable y un axioma justísimo en política y en jurisprudencia, que las leyes que alteran la organizacion de los Tribunales, no se considera que tengan efecto retroactivo prohibido por la Constitucion federal, aunque los Tribunales nuevamente establecidos tengan que conocer y fallar sobre delitos perpetrados con anterioridad á la nueva organizacion; pero este principio proclamado por los sabios, y consignado por fortuna y para honor de la Legislatura del Estado, en el art. 3º fraccion 7ª del Código Civil, se refiere y debió referirse á la organizacion de los *Tribunales Ordinarios* establecida para juzgar á todo ciudadano que no tenga el fuero constitucional, por ser alto funcionario, para que así haya *igualdad ante la ley*; porque entonces á nadie se hace injuria en alterar la organizacion y hasta las atribuciones de un tribunal ordinario que es para todos y que presta igual garantía á todo ciudadano. Pero el axioma no se refiere al estableci-

miento de Tribunales especiales formados de autoridades administrativas ó políticas; porque entonces sería ridícula la garantía del artículo 13 y la del artículo 21 de la Constitución federal.

En efecto: esos artículos prohíben que un hombre sea juzgado por Tribunales especiales y formados por autoridades políticas que no tienen la facultad de imponer penas; y si por el axioma de que esas leyes que alteran la organización de los Tribunales no se considera que tengan efecto retroactivo, se juzga á un hombre por un Tribunal especial y formado de una autoridad política, resultaría que la prohibición de ser juzgado por Tribunales especiales, sería ridícula y un verdadero sarcasmo para el hombre, supuesto que en cualquier día y á cualquiera hora que se estableciera el Tribunal especial por una ley, esta siempre sería orgánica de Tribunales, que no se consideraría con efecto retroactivo.

Y los legisladores constituyentes bien ilustrados, no pudieron consignar la prohibición del artículo 13, para que fuera la befa de los funcionarios y una amarga burla para el hombre.

Todavía mas: cuando el artículo 14 de la Constitución quiso que nadie fuera juzgado ni sentenciado sino por Tribunales previamente establecidos por la ley, es claro que se refirió á los *Tribunales especiales*; porque los Legisladores no pudieron ignorar, que los Tribunales ordinarios pueden organizarse de mil modos, según lo exija la experiencia y los adelantos de la civilización. Por manera, que lejos de que sea absurda la interpretación que nuestro patrono da al artículo 14, no es sino la única posible.

El le pondría este dilema al Gefe político: O el artículo 14 al prohibir que nadie sea juzgado ni sentenciado sino por Tribunales establecidos previamente por la ley, se refirió á los Tribunales ordinarios, cometiendo el Congreso Constituyente el dilate de prohibir la alteración en la organización y facultades de los *Tribunales or-*

dinarios, ó se refirió á los Tribunales especiales, establecidos por leyes también especiales. No podemos decir que sean unos bárbaros ó ignorantes los Legisladores constituyentes; luego la prohibición del artículo 14, se refirió á los *Tribunales especiales* establecidos por leyes especiales.

Por manera que concordando el artículo 13 que prohíbe establecer esos Tribunales especiales, con el 14 que prohíbe ser juzgado por Tribunales que no sean establecidos previamente, debemos inferir que se trató, en la Constitución, de un caso neto y marcado como el que nos ocupa. Esto es, de que un Tribunal especial no puede conocer y sentenciar sobre un delito que se haya verificado con anterioridad al establecido de ese Tribunal.

De otro modo, no hay aplicación posible del artículo 14, y mejor sería borrarlo del Código federal contra la filosofía mas sensata que lo ha inspirado al Congreso Constituyente y que ha recibido el aplauso del pueblo.

Los autores de la ley de 9 de Abril de 1870, saben el artículo 14 hasta de memoria, y no les ocurrió suspender las garantías que él otorga; luego no han querido que el Tribunal especial que ellos criaron, conozca de plagios que se han verificado antes que se expidiera la ley.

Luego el argumento del Gefe Político probaría tanto que nada probaría, porque haría inútil el artículo 14 con el pretexto de que aunque el Tribunal especial se hubiera establecido con posterioridad al delito, era competente para conocer y sentenciar sobre él, porque la ley que lo crearía siempre sería orgánica de tribunales.

Ni por un momento se puede llamar orgánica de Tribunales ordinarios, la ley de Abril de 70. No es mas que una ley especial de suspensión de garantías y de meras circunstancias, que no puede perseguir delitos anteriores á ella, ni facultar á los Tribunales que establece para juzgar y sentenciar sobre esos delitos, si no es cuando expresamente se hubiera suspendido por ella

la garantía del artículo 14; pero mientras eso no se verifique, como de hecho no se ha verificado, la ley de 9 de Abril solo puede referirse á hechos posteriores á su publicacion.

No es menos débil el argumento del Gefe Político cuando dice: que no se ha dado efecto retroactivo á la ley de 9 de Abril de 70, en cuanto á la aplicacion de la pena, porque el decreto del Estado de 21 de Abril de 1868, imponia la de muerte, y es anterior al plágio que se verificó el dia 23 del mismo Abril; y que nos obligó ese decreto desde el dia 21, dia de su publicacion en Toluca, porque vivimos en lugares distantes menos de cinco leguas de la capital; y en este caso obliga á esa clase de residentes el decreto, conforme á lo prevenido en el artículo 2º del Código Civil del Estado.

Hay en este alegato, con perdon del Gefe Político, errores crasísimos de hecho y de derecho.

Está demostrado anteriormente, que el plagio de Silva se verificó entre tres y cuatro de la tarde del dia 23 de Abril de 68, segun las declaraciones del mismo Silva, de su señora, de Arredondo, Orozco y Avila. Y está plenamente justificado con el oficio del mismo ciudadano Gefe Político Agustin Gonzalez, fojas 26, que el decreto número 25 de 21 de Abril de 68 que impone la pena de muerte á los plagiarios, se publicó en esta capital, no el dia 21, como ligeramente lo habia dicho el Gefe Político en su informe, sino el dia 23 del mismo Abril á las diez y media de la mañana, segun aparece del expediente de decretos de la Jefatura, y segun lo habia certificado el ciudadano Gefe Político Manuel Alas Marmolejo, en el Juicio de Amparo de Antonio Pliego, citado por el patrono á la página 30 del Cuaderno impreso que corre en autos.

Consta tambien por el oficio de la secretaría de Gobierno, fojas 49, que la distancia de esta ciudad á la hacienda de Nijini, es de trece á catorce leguas. Y en el mapa del Distrito de Toluca, levantado por D.

Tomás Ramon del Moral, corregido por la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado y litografiado por D. Plácido Blanco en 1852, de órden precisamente del que era entonces y es hoy Gobernador del Estado, ciudadano Mariano Riva Palacio, se vé claramente aplicando el compas, que la hacienda de Nijini dista de esta ciudad cerca de 14 leguas.

Los ginetes andan por lo comun dos leguas por hora; luego habiéndose publicado el decreto de 21 de Abril de 68, á las diez y media de la mañana del dia 23, y habiéndose verificado el plagio entre tres y cuatro de la tarde, era casi imposible que hubieran conocido los plagiarios de Silva el decreto de 21 de Abril.

En efecto: si se supone que ellos estaban en Toluca á las diez y media de la mañana, hora de la publicacion, necesitaban siete horas para llegar á la hacienda de Nijini; y de las diez y media en que se publicó el decreto, á las tres y media en que se verificó el plagio solo han mediado cinco horas; luego lo mas cierto y lo mas justo es suponer que los plagiarios salieron de esta ciudad, cuando menos, dos horas antes de la publicacion del decreto, que en consecuencia no estaba publicado para ellos.

Esto se confirma con las declaraciones de Cenobio Arredondo, fojas 33 vuelta, y de Jesus Orozco, fojas 37, segun las que han partido temprano y como á las cinco de la mañana de la casa de Juan Pliego.

En la aplicacion del artículo 2º del Código Civil del Estado, que previene surta la ley sus efectos en los lugares dependientes del en que se publique, y que no disten mas de cinco leguas de este, desde el dia de su publicacion, comete tambien un error el gefe político; porque el primer libro del Código se ha sancionado hasta el dia 20 de Febrero de 1870; y es claro que no puede ser obligatorio en Abril de 68 el artículo 2º comprendido en el primer libro de ese Código.

Lejos de esto el decreto de 21 de Abril tan severo y terrible, exige en su artículo 40

una manera especial de publicarse; porque previene, que se fijen ejemplares de él en todos los pueblos, ranchos y rancherías del Estado; luego no bastó que se publicara en la capital para que obligara en los lugares que disten de ella menos de cinco leguas.

Yo, Valentin Piña, soy vecino de Metepec, y en consecuencia, era preciso para que me obligara el decreto, que se hubiera publicado en Metepec; y allí se ha publicado hasta el día 28 de Abril de 68, según el oficio del alcalde de Metepec que se registra á folios 50; luego no ha podido obligarme desde el día 23 del mismo mes.

Yo, Pascual Valdés, vivo en San Pablo, lugar distante de Toluca mas de dos leguas, según el Mapa citado. No era posible que el decreto se publicase á las diez y media del día 23 de Abril en esta ciudad y se publicase á la misma hora en San Pablo; porque este pueblo es de la Municipalidad de Toluca, y era preciso que mediara tiempo entre la publicación hecha por el Gefe Político, la remisión del decreto al Ayuntamiento, y despues la remisión al auxiliar de San Pablo. Es indudable que en este pueblo no se puede haber publicado sino cuando mas el día 24; luego no ha podido obligarme desde el 23.

Es, pues, una equivocación la del Gefe Político, al invocar para la aplicación de la pena de muerte, el decreto de 21 de Abril que no estaba publicado, ni era obligatorio para nosotros el día 23 de Abril en que otros plagaron á Silva.

Pero suponiendo que en el día y hora de ese hecho, nos hubiera obligado el repetido decreto, ¿se inferiría que no se había dado efecto retroactivo á la ley de 9 de Abril de 1870, aplicándola á un hecho verificado en Abril de 68, porque en este mes hubiera otra ley vigente que castigara el plagio? Nosotros no comprendemos esa lógica.

El Gefe Político confiesa en sustancia, que se dió efecto retroactivo á la ley de 9 de Abril de 1870; y pretende eludir la dificultad con alegar, que el decreto de 21 de

Abril de 68 impone la misma pena de muerte que aquella ley. Como si dijera: "Es inútil el amparo; es cuestión de tiempo, dentro de poco morirán los reos."

Se equivoca otra vez el Gefe Político. Aunque se nos juzgara por el decreto de 21 de Abril, tendríamos la defensa amplia que hoy se nos ha negado, dejándose de practicar las diligencias que promovimos en favor nuestro, so pretexto del término angustiado de tres días. Nos juzgaría un Juez ordinario y letrado, que nos daría las garantías que á todo ciudadano, y tendríamos el recurso de apelación que permite esa ley; y como estamos persuadidos de nuestra inocencia, nada temeríamos del juicio que entonces se abriera.

Sobre todo, no es hoy la cuestión acerca de la ley porque se nos deba juzgar, una vez otorgado el amparo, ni al Gefe Político le corresponde decidir en ella cuando se promueva.

La cuestión es, sobre si se ha dado ó no efecto retroactivo á la ley de 9 de Abril de 1870; y una vez decidida en favor nuestro, como lo esperamos de la ilustración del Juzgado, vendrá la cuestión sobre la ley por la que se nos deba juzgar, cuyo fallo ó resolución es de la exclusiva incumbencia de los Tribunales del Estado.

Entonces ellos, con su buen criterio, se cuidarán de aplicar el decreto de 21 de Abril de 68 en la parte en que se restringe las garantías del hombre, estableciendo las pruebas privilegiadas; porque ellos saben bien que no deben dar efecto retroactivo al decreto, y que ante todo tienen que obedecer la Constitución con preferencia á las leyes de los Estados.

Pero en fin, si se quiere otra razón para que se acabe de persuadir el Gefe Político, diremos que el decreto del Estado es ya nugatorio y caduco en nuestro derecho público aceptado por los Estados y por el pueblo.

En efecto: La mayoría de aquellos ha consentido que el Congreso de la Unión legisle sobre los procedimientos y la pena

relativos al delito de plagio, dejando invadir su soberanía, toda vez que el derecho penal y de procedimientos criminales es de la exclusiva pertenencia del régimen interior de los Estados; pero hoy ningún Estado se atreve á legislar sobre el plagio, y no vemos raxon para que las leyes de Reforma se pretendan observar como si fueran constitucionales, y no se observe como tal el principio de que para el delito de plagio, el único legislador sea el Congreso general.

Las leyes de la Reforma se sostienen, segun sus defensores, en el consentimiento del pueblo; luego si hay el mismo consentimiento respecto de la competencia del legislador, para los delitos de plagio, ya no es posible juzgar y sentenciar á los acusados de ese delito por las leyes de los Estados, quienes de mas á mas no han podido suspender las garantías constitucionales, como lo hizo de hecho la del Estado de México en el decreto de 21 de Abril.

Resueltas las objeciones del Gefe Político, queda en pié la conclusion que hemos procurado demostrar, asentando con las leyes en la mano, que se han violado en nuestra contra todas las garantías del artículo 14 de la Constitucion, porque se ha dado efecto retroactivo á la ley de 9 de Abril de 1870, y con ese procedimiento se nos ha juzgado por una ley dada con anterioridad al hecho que se nos imputa, por Tribunal especial establecido con posterioridad al hecho mismo, y que no ha sabido aplicar exactamente ni la misma ley de que abusa.

Añadiremos, que el mismo efecto retroactivo que se dá á la ley, ha hecho que se violen en contra nuestra las garantías de la primera parte del artículo 13, de la primera parte del artículo 19 y de los artículos 20 y 21 de la Constitucion federal.

Eso es tambien evidentísimo. Esas garantías no estaban suspensas el día 23 de Abril de 1868, y teníamos derecho á que se nos otorgasen; luego si se nos quitan por dar efecto retroactivo á la ley, este efecto se estiende á violar para nosotros garantías de que legalmente hemos debido disfrutar.

Por eso nos hemos quejado de que se ha violado ademas la garantía del artículo 16, porque supuesto el efecto retroactivo de la ley de Abril, resulta que el Gefe Político no ha debido como Tribunal especial conocer y juzgar de un plagio verificado casi dos años antes que se dicra la ley de 9 de Abril de 70; luego nos han molestado en nuestras personas sin ser autoridad competente, que es lo que prohibe el artículo 16 de la Constitucion.

Aquí concluiríamos; pero es necesario llamar la atencion de vd., ciudadano Juez, en el hecho de que el ciudadano Nolasco Cruz castiga á mí, Valentin Piña, *por la presuncion de haber sido yo plagiario* del ciudadano Severo Valdés, de Cacalomacan, como se vé á fojas 16 vuelta, en que toma esa presuncion como nueva prueba de que fui plagiario de Silva.

Prescindiendo por ahora de que el ciudadano Nolasco Cruz no debe imponer la pena de muerte por una presuncion, sino por pruebas segun el artículo 3º de la ley de 9 de Abril, tengo que decir que el plagio de Valdés se verificó el día 14 de Febrero de 1868.

Esperaba mi patrono que en el proceso se precisaran las fechas como era natural; pero ya que no ha sido así, adjuntamos una carta de Severo Valdés en que consta la fecha en que se verificó el plagio, y que para mejor proveer, puede vd., ciudadano Juez, hacer que se ratifique su autor.

De pronto, fíjese el Juzgado en que solo se aduce la presuncion del plagio de Valdés como prueba para el plagio de Silva, cometiéndose en esto la mas palmaria injusticia (hablamos guardando el respeto á la autoridad) porque la presuncion de haber cometido un plagio, no puede en buena lógica servir de prueba para la culpabilidad en otro, porque esto es probar con una presuncion otra presuncion. Y tanto mas cuanto que lo que el ciudadano Nolasco Cruz llama presuncion, no merece ni ese nombre. Se funda en los dichos de Alejo Quintana y de Vicente Avila, que son acusados de crí-

menos atroces y que se llaman cómplices; y ya está visto que esta clase de testigos no merecen fé alguna en juicio.

Hay mas. Quintana declara, no como testigo de vista del plagio, sino de una confesion extrajudicial hecha á él, como es de verse en la foja 36 vuelta, y para que la confesion extrajudicial pueda valer como *sospecha*, es preciso que esté probada por dos testigos, como entre otros lo enseñan los glosadores de los Códigos concordados, en la nota 2ª á la ley 7, tit. 13, partida 3ª.

Respecto del dicho de Vicente Avila debemos decir que en las dos declaraciones de éste, de fojas 39 y 42, no hay una sola letra que revcle que el testigo imputó á Pina el plagio de Valdés; por lo que se equivocó horriblemente el ciudadano Nolasco Cruz al suponer en su sentencia, á la foja 16 vuelta, que el testigo habia dicho lo que no pensó decir.

A propósito del plagio de Valdés, nótese el silencio que en este punto ha guardado el C. Agustín Gonzalez en su informe, lo que prueba, que ni ha tenido la conciencia de defender los procedimientos de su antecesor, ni ha podido afrontar la cuestion sobre el efecto retroactivo de la ley de 9 de Abril, para juzgar sobre ese plagio verificado en 14 de Febrero de 1868. Para él no habia lugar ni al sofisma apoyado en el decreto del Estado de 21 de Abril del mismo año, supuesto que era dos meses posterior al plagio, y por esto persuadido de su debilidad, el C. Gonzalez, esquivó la cuestion.

Reasumiendo ya, me será lícito decir que quedan probados los puntos siguientes.

1º Que el C. Nolasco Cruz violó en nuestra contra, en la Acta y sentencia que corren en autos á la foja 16, y de la 33 á la 48, juzgándonos y sentenciándonos á muerte por el plagio de Silva, que ilegalmente se nos imputa, todas las garantías del artículo 14 de la Constitucion, que dió efecto retroactivo á la ley de 9 de Abril de 1870 porque conoció y falló siendo un Juez ó Tribunal establecido con posterioridad al

hecho, y porque no aplicó á éste la ley con la exactitud debida.

2º Que por el mismo hecho violó en nuestra contra ese funcionario las garantías de la parte 1ª del artículo 13, de la parte 1ª del artículo 19, y de los artículos 20 y 21 de la Constitucion federal; porque no habiendo estado suspensas esas garantías el dia 23 de Abril de 1868, dia en que se verificó el plagio que se nos imputa, no deben estar suspensas hoy para nosotros.

3º Que violó el C. Cruz las garantías del artículo 16 de la Constitucion, porque habiendo sido Juez incompetente, nos molestó en nuestra persona contra las prescripciones del artículo Constitucional.

4º Que pretendió violar las propias garantías, al querer juzgar á Valentina Pina por el plagio de Severo Valdés verificado desde el 14 de Febrero de 68.

Esto era lo que debiamos probar, supuesto que fundamos nuestra queja en la violacion de las garantías expresadas; luego probamos bien y legalmente nuestra accion y tenemos derecho á que la justicia federal nos ampare y proteja. Así lo esperamos de la rectitud del C. Juez, que no dudamos se persuadirá, de que el caso presente no se halla comprendido en el texto del artículo 89 de la ley de 20 de Enero de 69; porque no se trata de un negocio judicial, sino de actos arbitrarios del Gefe Político de Toluca, que se han querido revestir con el ropaje majestuoso de judiciales.

En este punto repetimos los argumentos alegados en nuestro escrito de demanda, fojas 3, y rogamos al Juzgado se fije en ellos, porque en nuestro humilde concepto son bastante robustos.

Solo añadiremos, que en el foro de la capital de la República y en el del Estado hay la persuasion íntima de que ese artículo 89 es contrario á la fraccion 1ª del artículo 101 de la Constitucion; porque allí se permite el amparo por *actos de cualquiera autoridad que viole las garantías individuales*, sin exceptuar los *actos ó negocios judiciales*.

El artículo 8º es entonces meramente restrictivo, y por lo mismo contrario al artículo 101 de la Constitución, que solo puede reformarse mediando los requisitos del artículo 127 del mismo Código, los cuales sin duda no precedieron para la sanción del repetido artículo 8º.

En nuestro caso es todavía mas palpable la contradicción de este artículo con el 101 constitucional, porque se trata de una garantía que solo puede otorgarse en negocios judiciales.

En efecto: según el artículo 14 de la Constitución, todo hombre tiene derecho á ser juzgado y sentenciado por ley dada con anterioridad al hecho que se le imputa; y es claro que si violándose esa garantía, *se juzga y se sentencia á un hombre por ley dada con posterioridad al hecho*, se viola una garantía preciosa en negocios judiciales; luego es claro también que al conceder el artículo 101 el amparo para *cualquiera* acto de cualquiera autoridad que viole las garantías individuales, como lo es sin disputa la del artículo 14, quizo el Legislador Constituyente que se otorgase el amparo en negocios judiciales; luego negando este amparo el artículo 8º de la ley de 20 de Enero, es contrario á la Constitución y deroga en sustancia el artículo 14 y restringe el 101.

Y los jueces C. deben obedecer la Constitución antes que las leyes secundarias, que la restrinjan y deroguen, si no es un sarcasmo para el pueblo Mexicano el artículo 126 de la Constitución.

Nos permitiremos alegar sentencias que han concedido amparo contra jueces incompetentes y en causas criminales; porque si bien es cierto que el artículo 26 de la ley de 20 de Enero prohíbe alegar ejecutorias, es solo como pretexto para dejar de cumplir las leyes contra las que se otorgó el amparo; pero no como doctrinas y como fundamentos jurídicos para solicitar á su vez el amparo que á otro se ha concedido.

Sentencias de amparo contra actos de jueces incompetentes tenemos las del Tri-

bunal del Circuito de Culiacán, fecha 28 de Enero de 1869 que se registra en el tomo 2º del "Derecho" página 163; la del Juzgado de Distrito de Michoacán fecha 6 de Febrero de 69 (tom. citado, pág. 167;) la del mismo Juzgado fecha 12 de Marzo de 69, (id. pág. 226,) la del Juzgado de Distrito de Puebla fecha 19 de Marzo de 69, (id. pág. 244,) y la del Juzgado de Veracruz de la misma fecha, (id. pág. 245.)

Sentencias de amparo en causas criminales, tenemos la del Juez de Puebla de 19 de Agosto de 1869, (tom. 3º de id., pág. 172,) la del Juez de Tlaxcala fecha 8 de Octubre de 69, (tom. id., pág. 280,) y la del Juez de San Luis Potosí de 6 de Marzo de 1869, (tom. 2º citado, pág. 209.)

No tema entonces este Juzgado seguir la senda de sus compañeros, y dé una prueba mas del respeto que se debe á la Constitución del país, que es y debe ser la ley suprema de la República, y á quien no es lícito destruir ni aun con el pretexto de dar una ley orgánica, que todo podrá ser menos derogatoria ó restrictiva de la Constitución.

Tampoco lo arredre el que la opinión pública esté pidiendo nuestra cabeza. El vulgo se fascina fácilmente. El también pedia la cabeza del ciudadano Antonio Pliego, y ha sido declarada su inocencia con fórmulas muy honoríficas por los Tribunales del Estado, después que lo amparó la Justicia Federal contra la aplicación del bárbaro decreto de 21 de Abril de 1868, que tanto proclama hoy el Gefe Político.

Invocará nuestro patrono en esta vez como lo hizo entonces, las bellísimas frases del Sr. Caravantes, (tom. 3º pág. 150,) para decir al Juzgado "que no es en el grito general de la opinión, sino en los hechos de la causa donde los jueces deben buscar las pruebas de la inocencia ó culpabilidad."

Haga vd. entonces plena justicia, ciudadano Juez, péscle al vulgo y péscle también á los tenaces defensores del artículo 8º de la ley de 20 de Enero. Al frente de ellos está otra falange de sabios respetables, que

prefieren la observancia del artículo 101 de la Constitución.

Póngase el Juzgado al lado de ellos y recuerde aquel adagio de la antigüedad: "Fiat justitia et ruat cælum." Seamos justos y suceda despues lo que sucediere.

Esta esperanza nos anima porque sabemos bien que este Juzgado es tan ilustre como independiente.

Toluca, Febrero seis de mil ochocientos setenta y uno.—(Firmados.)—*P. Valdés.*
—*Valentin Piña.*—*Lic. Prisciliano María Díaz Gonzalez.*

Sentencia del Juez de Distrito.

Juzgado de Distrito del Estado de México.

Toluca, Febrero once de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el recurso de amparo interpuesto por Pascual Valdés y Valentin Piña, contra los procedimientos del Gefe Político que lo fué de esta ciudad, ciudadano Nolasco Cruz, quien condenó á los citados Valdés y Piña á sufrir la pena capital, porque fueron acusados como cómplices en los plagios de los ciudadanos Sebastian Silva y Severo Valdés, perpetrados en los dias 14 de Febrero y 24 de Abril de 1868.

Visto el informe del ciudadano Gefe Político Agustin Gonzalez; el testimonio de las diligencias que se practicaron con los acusados y correo agregado á estos autos; las comunicaciones remitidas por la secretaría del Gobierno del Estado y autoridades municipales, que tambien se han agregado; el alegato producido por el patrono de los acusados y pedimentos del ciudadano Promotor fiscal, con todo lo demas que se tuvo presente y ver convino, el suscrito juez, para fundar el fallo que deba pronunciar en este juicio de amparo, asienta previamente las consideraciones siguientes:

1ª Los quejosos para promover el referido recurso, se han apoyado en la fraccion

1ª, artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, en virtud de considerar violadas en sus personas las garantías individuales que otorga el artículo 14 de la Constitución general de 5 de Febrero de 1857.

2ª De autos consta perfectamente probado, que los plagios que sufrieron los ciudadanos Sebastian Silva y Severo Valdés, se perpetraron en el año de 1868, tiempo en que no se habia expedido la ley de 9 de Abril de 1870, que mandó suspender las garantías individuales respecto de los salteadores y plagiarios, cometiéndola facultad de sentenciar á estos, á los Gefes Políticos de los Distritos; y en consecuencia, si avocarse dichas autoridades el conocimiento respecto de los delinquentes de esa clase, que perpetraron el delito de plagio ó asalto antes de la publicacion de la ley de 9 de Abril referida, es en primer lugar abrogarse facultades de que carecian, y dar efecto retroactivo á una ley que indisputablemente deberia aplicarse y surtir sus efectos en los casos que ocurrieran despues de su publicacion en los diversos puntos de la República.

3ª Aun suponiendo que en el caso que nos ocupa, no se hubiera dado efecto retroactivo á la ley de 9 de Abril citada, y que por lo tanto hubiera tenido facultades el Gefe Político que instruyó el proceso, para sentenciar á los quejosos, dicha ley no está perfectamente aplicada al hecho sobre que versó el proceso; pues no está justificado que los sentenciados hubieran sido cómplices en los plagios de Silva y Valdés; y cuando el artículo 3º de la ley de 9 de Abril de 1870, previene que dentro de tres dias se pronuncie la sentencia de muerte contra los salteadores ó plagiarios, es con calidad de que esté probado el delito, y esta prueba incuestionablemente debe ser plena y perfecta, de manera que no deje duda en que el acusado fué autor del asalto ó plagio de que se trate, especialmente cuando va de por medio la vida del hombre, segun las leyes 26, título 1º, partida 7ª, y 12, título XIV, partida 3ª.

4º El Gefe Político actual, ciudadano Agustín González, en el informe que se le pidió para sostener la sentencia de su antecesor, hace mérito del decreto del Estado, número 25, de 21 de Abril de 1868; mas sin embargo, tal decreto tampoco estaba publicado, según aparece de autos, en el lugar y hora en que se cometió el delito; pero aunque así hubiera sido, los quejosos no fueron juzgados con arreglo á él, sino á la ley de 9 de Abril ya citada; y por otra parte, el mencionado decreto no comete á los Gefes Políticos la facultad de juzgar á los plagiarios, sino que la otorga á los jueces de 1ª instancia del Estado.

5º El mismo Gefe Político, alega que no cabe el recurso de amparo en negocios judiciales, conforme al artículo 8º de la ley de 20 de Enero de 1869; pero tal artículo no es aplicable á este caso; porque él se refiere á los actos judiciales propiamente dichos y no á los de una autoridad política, que en virtud de una ley especial y de circunstancias, tiene la facultad de condenar á muerte á los autores de plagio ó asalto; y aun cuando pudiera ser extensiva á esos actos, hay ya varias ejecutorias sobre el particular que deben respetarse.

6º La razón aducida por el propio Gefe Político, de que á la ley de 9 de Abril tantas veces citada, puede darse efecto retroactivo, porque se debe considerar como de procedimientos judiciales, y las de esta clase son la excepción del principio universalmente reconocido, de que las leyes no deben tener efecto retroactivo, no es de atenderse; porque, en primer lugar, esa excepción como lo indica el fundamento aducido por el Gefe Político, solo comprende á las leyes llamadas propiamente de procedimientos ó organización de tribunales; pero de ninguna manera á las meramente penales, en cuya categoría está la citada ley de 9 de Abril de 1870; además, esa misma excepción no puede extenderse á la creación de tribunales especiales, sino á la nueva organización de los tribunales ordinarios ya establecidos.

7º Por las consideraciones que preceden, aparece con toda claridad que el C. Gefe Político de este distrito, Nolasco Cruz, al sentenciar á muerte á los quejosos Pascual Valdés y Valentín Piña, atacó en sus personas las garantías individuales que otorgan los artículos 14 y 16 del código fundamental de la República.

Por tales razones, y con fundamento de la fracción 1ª artículo 1º, y artículos 13, 27 y 28 de la ley de 20 de Enero de 1869, fallo:

Primero. La justicia de la Unión ampara y protege á los quejosos Pascual Valdés y Valentín Piña, contra el acto del Gefe Político de este distrito que los condenó á sufrir la pena de muerte.

Segundo. Publíquese esta sentencia en los periódicos oficiales de la capital de la República y del Estado, á cuyo efecto se remitirán copias de ellas á las redacciones respectivas; y

Tercero. Hágase saber, y remítanse estos autos á la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Así lo decreté, mandé y firmé con testigos de asistencia, por ausencia del secretario de este juzgado.—Doy fé.—*Lic. Petronilo Ochoa.*—Asistencia, *Ignacio Miranda.*—Asistencia, *T. Frias.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero veintiuno de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juez de Distrito del Estado de México por Pascual Valdés y Valentín Piña contra el acto del ciudadano Nolasco Cruz, Gefe Político de Toluca, que los condenó á la pena capital; y considerando: que no era Juez el Gefe Político para conocer de un delito cometido antes del decreto que daba á dicha autoridad carácter de Juez especial; y que por lo mismo, en el caso,

se violó la garantía consignada en el artículo 14 de la Constitución federal. Por lo expuesto, y de conformidad con lo que previene el artículo 101 de la misma Constitución, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada el 11 de este mes de Febrero, por el Juez de Distrito del Estado de México, que declara: que la Justicia de la Unión ampara y protege á los quejosos Pascual Valdés y Valentín Piña contra el acto del Gefe Político del Distrito de Toluca que los condenó á sufrir la pena de muerte.

Devuélvanse sus actuaciones al Juez de Distrito del Estado de México, con copia certificada de este auto, para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados.)—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arienga.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramírez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Febrero veintisiete de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio de amparo promovido ante el Juzgado del Distrito del Estado de Hidalgo por Benito H. Ayala, solicitando ser puesto en libertad conforme á la ley de amnistía.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez:

El Promotor dice: Que el ciudadano Benito H. Ayala se ha presentado al Juzga-

do interponiendo recurso de amparo, porque en su persona juzga violadas las garantías que otorga la Constitución en la fracción 1ª del artículo 85, y los artículos 1º y 3º de la ley de amnistía, porque estando extinguiendo la pena de diez años de presidio en que le conmutó la de muerte la Legislatura del Estado de Hidalgo, y á que fué condenado por juzgarlo inodado en el movimiento habido en Pachuca el 8 de Marzo último, no se le ha puesto en libertad según lo prevenido por la ley de amnistía. Pedido el informe respectivo al ciudadano comandante militar, lo ha evacuado manifestando, que el ciudadano Ayala se encuentra preso por haberlo remitido el ciudadano Gobernador del Estado de Hidalgo, para que se mandara á Acapulco á extinguir la pena de diez años de presidio que le impuso la Legislatura de este Estado al indultarlo de la pena de muerte. Como no consta que esa pena fué impuesta al reo por delito político, que es el caso que comprende la ley de amnistía, ó por otro delito, para esclarecerlo puede el Juzgado mandar se reciba á prueba el juicio por el término de la ley.

México, Octubre treinta y uno de mil ochocientos setenta.—(Firmado.)—*Herrera Campos.*

Sentencia del Juez de Distrito.

México, Diciembre diez y nueve de mil ochocientos setenta.

Visto el juicio de amparo seguido ante este Juzgado primero de Distrito, en virtud de la solicitud de Benito H. Ayala; vistas las diligencias practicadas, las pruebas rendidas y lo alegado por su defensor, y visto cuanto se ha tenido presente para su resolución, y considerando: que Ayala al pretender el amparo manifiesta: que fué juzgado por el ciudadano Gefe Político de Pachuca, por el movimiento revolucionario ocurrido en dicho lugar el día 8 de Marzo de este año, y al ser sentenciado se le condenó á la última pena, la que le fué comu-